Imprimir

En Colombia hoy se ve posible lo que siempre ha parecido imposible, desde la posesión del presidente Gustavo Petro. Bienvenido el “sí se puede” para solucionar las guerras incestuosas que proliferan en el territorio como maleza.
No será fácil. Tras dos siglos de guerras la población se ha acostumbrado a vivir entre estruendos, y asiste a los noticieros a constatar la tragedia de cada día: cuando las noticias no tren su dosis de sangre no gustan. Porque no sólo nos hemos acostumbrado a la violencia, sino que aprendimos a disfrutarla, haciendo de la vida cotidiana el reto de sobrevivir un día más, para mostrarnos a la mañana siguiente como veteranos de todas las violencias. Por lo mismo gustamos de mirar el conflicto como espectáculo ajeno, algo que acontece en ciertas regiones, y cuando se pregunta por el departamento propio se señala como endémico en veredas lejanas, así sea en el mismo municipio. Desmentimos la guerra para poder sobrellevarla, y vivimos la patria como una lejanía.

Ya las víctimas se aproximan a los diez millones, y la cifra parece increíble, como todas las demás cuentas de un conflicto degradado. Mientras crecen los damnificados, las utilidades de algunos actores crecen vertiginosamente, porque la guerra ha generado economías alternas de tal magnitud que llegan a sustituir la oficial, y han permitido a Colombia mantener algún crecimiento económico cuando las finanzas latinoamericanas se desploman. La guerra resultó esplendido negocio: no se golpea a los traficantes de armas, en una feria que tiene inundado de fierros la geografía nacional no se conoce el cartel de mercaderes de estos instrumentos; prolifera la minería ilegal que, regulada por la ley del más fuerte, depreda naturaleza y sociedad con ganancias exorbitantes; también otras explotaciones ilegales como la tala de bosques … La guerra ha multiplicado el lucro de la ilegalidad y no faltará quien agencie matazones.

También las fuerzas armadas tienen privilegios provenientes de la guerra que libran, así como hay quien considere la corrupción como un mal menor, o daño colateral, porque lo importante es acabar con el “enemigo interno”, siendo tolerable que los aliados saqueen el erario. Hasta un partido político surgió pidiendo mantener la guerra, y ha ganado elecciones con tal propuesta.

De la calamidad nacional de violencias cruzadas surgen otros beneficiarios, como ciertos periodistas, muy conocidos, que informan a favor de alguna de las partes y contra la otra, haciendo visible la atrocidad de unos, y ocultando, cuando no justificando la de otros; y los violentólogos, oficio con marca de origen colombiana, que viven del cuento de la guerra, a veces limitándose a propalar chismes de ilegales, pagados o no. Estos personajes resultarían perjudicados con un proceso de paz, y buscan acomodo ante la eventualidad.

Por distintos medios aparecen “analistas” que promueven considerar la delincuencia común, paramilitares y narcotraficantes en especial, como actores políticos. Un error conceptual tan protuberante que difícilmente se puede considerar ingenuo. La meta gubernamental de Paz total comprende la voluntad de encontrar solución a las diversas violencias que se entrecruzan, pero requiere que cada una de ellas sea tratada en su especificidad. Siguiendo la metáfora de Bateman, hacer bien la política es como hacer bien el sancocho, no diferenciar entre modalidades delincuenciales y actores de las mismas no es hacer un sancocho, sino una bazofia, aguamasa como se dice en Antioquia.

No es lo mismo un guerrillero que un paramilitar, y que un mafioso. Y entre paramilitares y mafiosos también hay diferencia. Sostenía Gustavo Duncan: “Si bien todos los mafiosos no son paramilitares, todos los paramilitares sí son mafiosos”. Colombia tiene una larga experiencia en la materia y se ha diferenciado a quien delinque por la paga de quien lo hace por ideales.

Las múltiples violencias desbordan la capacidad del Estado y es necesario establecer acuerdos con mafias capaces de desestabilizar al país, o transversales a otras violencias, como es su momento se hizo con Pablo Escobar, jefe entonces del Cartel de Medellín, o como lo hizo el gobierno Barco con los esmeralderos para detener una guerra que alcanzaba cientos de víctimas. Curiosamente, los acuerdos del gobierno Uribe con el paramilitarismo dejaron por fuera el narcotráfico, en todas las partes de la cadena de valor. El acuerdo del gobierno Santos con las Farc abordó el eslabón de cultivos en la cadena de producción de la cocaína, así como el problema del consumo. Hoy, aprovechando la experiencia, se requiere de creatividad para darle una salida incruenta al problema de las mafias del narcotráfico.

Creatividad no complicidad.

Sobre el paramilitarismo sobran estudios y jurisprudencias que lo sacan de cualquier finalidad política, por lo cual se habla de sometimiento a la justicia, o algún sinónimo. Se trata de una modalidad de sicariato donde ha de diferenciarse al autor material del autor intelectual, y que requiere tratamiento específico para ambos. La alternatividad penal encontrará fórmulas que posibiliten la definitiva superación del fenómeno.

Durante más de siglo y medio se han hecho acuerdos de paz con delincuentes políticos, quienes tienen una finalidad altruista en su accionar, así recurran a delitos comunes en sus métodos. Tanto el partido liberal como el conservador han hecho parte de estos acuerdos, y la misma Constitución de 1991 es fruto de un tratado de paz. Con la insurgencia se han iniciado procesos desde gobiernos anteriores, se trata de seguir la construcción de la paz.

El modelo del gobierno Santos resultó exitoso, pero fue envenenado por Duque Uribe, se requiere un diseño nuevo en el esquema de negociación, el cese al fuego bilateral es un buen punto de partida, y reconfigura la mesa de negociación el no negociar en medio de las balas.

El tema es cómo se ha de seguir, no tanto retomando la mesa pendiente en La Habana, Cuba, porque con el ELN se ha avanzado muy poco, sino porque hay muchos elementos a tomar en la cuenta que no estaban antes. Las víctimas fueron un factor dinamizador del proceso con las Farc ¿lo seguirán siendo?

La Corte Penal Internacional es una realidad de este siglo, y los estándares de verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición, marcarán cualquier negociación, política o no. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que el presidente Petro se comprometió a cumplir “a rajatabla” marcarán las negociaciones, así como que el narcotráfico estará sobre la mesa y no debajo de la misma como en el pasado.

Hasta el presente la insurgencia, que parece encartada con su armamento, ha negociado sin afán, contando que el tiempo es presión para el gobierno y no para ellos. Hoy es al contrario, la existencia de un gobierno popular que emprende reformas para superar cien años de

abandono los despojará de legitimidad, y volverá quimera la toma armada del poder. Por eso, insurgentes, paracos, mafiosos, periodistas, violentólogos, deben tomar en serio la paz que hoy es posible, y evitar enredarla.

José Darío Castrillón Orozco

Foto tomada de: Infobae